Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a nueve de octubre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **04479/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXXXXXXXXX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **00455/ISSEMYM/IP/2024,** por parte del **Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual requirió la información siguiente:

*“1.- Los recibos de nomina en versión pública que se hayan generado en los últimos 5 años del C. Oscar López Vilchis. 2.- Los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios que dicho servidor público por el producto de su trabajo. 3.- La adscripción, clave presupuestal, y a quién deben de ser dirigidos los oficios descuento de pensión alimenticia, a los servidores públicos del ISSEMYM.****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** a través de SAIMEX.

**2. Prórroga.** El **diecisiete de junio de dos mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado** notificó a la persona solicitante la prórroga para dar respuesta**,** medularmente en los siguientes términos:

*“Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones:*

*Como archivos adjuntos, encontrará la resolución emitida por el Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de México donde se aprueba la ampliación del plazo por siete días hábiles, para dar respuesta a la solicitud de información pública. Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente respuesta, nos ponemos a sus órdenes en el teléfono (01722) 2261900 extensiones 1434072 y 1434073.” (sic)*

El **Sujeto Obligado** anexó la Resolución del Comité de Transparencia número CT/ISSEMYM-A04-31E/2024, de fecha diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, mediante la cual se aprobó la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de información a solicitud de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, adscrita al servidor público habilitado de la Coordinación de Administración y Finanzas, en virtud de estar llevando a cabo las integración de la información.

**3. Respuesta.** El **veintiséis de junio de dos mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…Como archivo adjunto, encontrará el oficio que dará respuesta a su solicitud de información...” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

- Oficio número 207C0401210001S-UT-1730/2024, de fecha veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Titular de la Unidad de Transparencia notificó a la persona solicitante la respuesta proporcionada por los servidores públicos habilitados de la Coordinación de Administración y Finanzas y de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, conforme a sus facultades, funciones y competencias previstas en el Manual General de Organización del ISSEMyM, en los siguientes términos:

La Coordinación de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, manifestó que derivado de la búsqueda en los archivos del Instituto, se localizaron los comprobantes de pago de la persona referida en la solicitud, del periodo del 16 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2024, los cuales proporciona en versión pública al contener datos personales, la cual se aprobó mediante la Resolución CT/ISSEMYM-A02-35E/2024, emitida por el Comité de Transparencia, en la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria. Asimismo, manifestó que en los comprobantes de pago se encuentran contenidas todas las percepciones y deducciones del servidor público; que se encuentra adscrito al Centro Médico ISSEMYM Toluca; que no hay clave presupuestal para el descuento de pensión alimenticia, sin embargo, el catálogo de percepciones y deducciones del Instituto contempla la clave 5410 para el concepto de “deducciones por Pensión Alimenticia”.

Con relación a los oficios de descuento de pensión alimenticia a los servidores públicos del ISSEMYM, de acuerdo con lo comunicado por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, y la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, informó que los oficios de descuento de pensión alimenticia deben ser dirigidos al Titular de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto, al ser la unidad administrativa encargada de dar el trámite correspondiente ante la Coordinación de Administración y Finanzas para realizar los respectivos descuentos.

Anexos:

- 120 comprobantes de pago del servidor público referido en la solicitud en versión pública, de la primera quincena de junio de dos mil diecinueve a la segunda quincena de mayo de dos mil veinticuatro.

- Resolución del Comité de Transparencia CT/ISSEMYM-A02-35E/2024, emitida en la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, por medio de la cual se aprobó la versión pública de los comprobantes de pago del servidor público referido.

**4. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **quince de julio de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“La respuesta emitida a la solicitud 00455/ISSEMYM/IP/2024"(sic)*

**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

*“Los recibos de nomina se encentran indebidamente testados, asimismo el acta en su totalidad se encuentra indebidamente fundada y motivada del acta mediante la cual aprobaron la clasificación de los recibos de nómina, con ello se obstaculiza la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, ya que oculta los recursos que fueron entregados al servidor público del que se realizó la solicitud. Pareciera que se actúa con dolo para proteger a un deudor alimentario."(sic)*

**5. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**6. Admisión del Recurso de revisión.** El **dieciocho de junio de dos mil veinticuatro,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**7. Manifestaciones**. El **trece de agosto de dos mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado** remitió, a través del SAIMEX, su informe justificado, mediante el cual se ratifica en sus términos la respuesta emitida en primera instancia por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, esto es la clasificación de los datos que fueron testados en los comprobantes de pago del servidor público referido.

Anexos:

- Oficio número 207C0401740000L/1708/2024, del treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Directora de Administración y Desarrollo de Personal, en atención a los puntos 1 y 2 de la solicitud, remitió los comprobantes de pago correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021, 2020, 2023 y 2024, del servidor público referido en la solicitud, en versión pública e íntegra a la dirección de correo electrónico institucional de la Unidad de Transparencia, asimismo, solicitó a la Unidad de Transparencia someter a consideración del Comité la aprobación de la versión pública correspondiente, a fin de atender la solicitud de información.

- Resolución del Comité de Transparencia CT/ISSEMYM-A02-35E/2024, remitida en la respuesta a la solicitud.

- Correo electrónico del once de junio de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género remitió a la Unidad de Transparencia el documento que contiene la respuesta a la solicitud 00455/ISSEMYM/IP/2024.

- Oficio número 207C0401740000L/1777/2024, del trece de junio de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Directora de Administración y Desarrollo de Personal, en atención al punto 3 de la solicitud, informó que la adscripción del servidor público referido en la solicitud es en el Centro Médico ISSEMyM Toluca; que es inexistente una clave presupuestal, sin embargo el catálogo de percepciones y deducciones contempla la clave 5410 para el concepto de “Deducción por Pensión Alimenticia”; asimismo, que los oficios deben ser dirigidos al titular de la Unidad Jurídica Consultiva y Equidad de Género del Instituto.

- Oficio número 207C0401210001S-UT-1730/2024, del veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Titular de la Unidad de Transparencia notificó a la persona solicitante la respuesta.

- Oficio número 207C0101210001S-UT-1897/2024, del quince de julio de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Titular de la Unidad de Transparencia notifica al servidor público habilitado de la Coordinación de Administración y Finanzas, la interposición del recurso de revisión 04479/INFOEM/IP/RR/2024, a efecto de que proporcione la información solicitada o manifieste lo que a su derecho convenga para estar en posibilidades de rendir el informe justificado.

- Oficio número 207C0401740000L/2031/2024, del dieciséis de julio de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Directora de Administración y Desarrollo de Personal, ratifica la respuesta emitida a la solicitud de información 00455/ISSEMYM/IP/2024.

Una vez analizados los documentos señalados, se hicieron del conocimiento de la persona solicitante con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho estimara conveniente, sin embargo, fue omisa en ejercer dicha prerrogativa.

**8. Ampliación del término para resolver**. El **veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro**, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este Organismo Garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra justificado en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“****PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO****.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“****PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS****.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**9. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **tres de octubre de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **veintiséis de junio dos mil veinticuatro,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, se tuvo por presentado el día **quince de julio de dos mil veinticuatro**, esto es al décimo tercer día hábil posterior en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis de los formatos de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

A efecto de sustentar lo anterior, es de suma importancia mencionar que si bien la persona solicitante **proporcionó un seudónimo,** como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, sin embargo, dicha circunstancia no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo* ***serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

En el mismo tenor, el propio artículo 180 de la Ley de Transparencia local citado, en su último párrafo establece que cuando el recurso se interponga de manera electrónica, no será indispensable que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre de la parte **Recurrente**, por lo que, en el presente caso, al haber sido presentado el recurso de revisión vía SAIMEX, dicho requisito resulta innecesario.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracciones II y XIII del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***…***

***II****. La clasificación de la información;*

***…***

***XIII.*** *La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y”*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Es aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

***1)*** *Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

***2)*** *Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

***3)*** *Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

1. Los recibos de nómina en versión pública que se hayan generado en los últimos 5 años, del servidor público referido en la solicitud.

2. Los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios de dicho servidor público por el producto de su trabajo.

3. La adscripción, clave presupuestal y a quién deben de ser dirigidos los oficios descuento de pensión alimenticia, a los servidores públicos del ISSEMYM*.*

En respuesta, el **Sujeto Obligado** por conducto de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de la persona solicitante la información proporcionada por los servidores públicos de la Coordinación de Administración y Finanzas y de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, en los siguientes términos:

**Coordinación de Administración y Finanzas,** a través de la **Dirección de Administración y Desarrollo de Personal:**

Respecto a los puntos 1 y 2 de la solicitud, remitió en versión pública 120 comprobantes de pago del servidor público de los ejercicios 2019 a 2024, así como la resolución mediante la cual el Comité de Transparencia aprobó la versión pública, asimismo, precisó que en los comprobantes de pago se encuentran contenidas todas las percepciones y deducciones del servidor público.

Respecto al punto 3, precisó que el servidor público se encontraba adscrito al Centro Médico ISSEMYM Toluca; que no hay clave presupuestal para el descuento de pensión alimenticia, sin embargo, el catálogo de percepciones y deducciones del Instituto contempla la clave 5410 para el concepto de “deducciones por Pensión Alimenticia”, y, finalmente informó que los oficios de descuento de pensión alimenticia deben ser dirigidas al Titular de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto.

**Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género**

Manifestó que no localizó información de los puntos 1 y 2 de la solicitud, derivado de la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta la Unidad.

En lo que respecta al punto 3, refirió que la adscripción donde se reciben las solicitudes de descuento de pensión alimenticia es la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, asimismo, en lo referente a la clave presupuestal, manifestó que no contaba con facultades para retener dicho recurso, al ser responsabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas, en virtud de que las solicitudes de descuento de pensión alimenticia a los servidores públicos del ISSEMyM, se dirigen a la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género la cual da el trámite correspondiente ante la Coordinación de Administración y Finanzas.

Al no estar conforme con los términos de la respuesta emitida, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, donde señaló como motivo de inconformidad, que los recibos de nómina se encontraban indebidamente testados, y por consiguiente el acta mediante la cual aprobaron la clasificación se encontraba indebidamente fundada y motivada en su totalidad, toda vez que se ocultaron los recursos que fueron entregados al servidor público del que se realizó la solicitud*.*

No pasa inadvertido para este Organismo Garante que los motivos de inconformidad alegados no versan sobre la totalidad de la información proporcionada por el **Sujeto Obligado,** pues la parte **Recurrente** no manifestó, inconformidad respecto de la adscripción, clave presupuestal y a quién deben de ser dirigidos los oficios descuento de pensión alimenticia, a los servidores públicos del ISSEMyM, así como de los comprobantes de pago, los cuales por su naturaleza, dan cuenta de la totalidad de las percepciones ordinarias y extraordinarias del servidor público; y la temporalidad de los mismos, sino que su inconformidad versa sobre la versión pública de éstos últimos.

En este orden de ideas, la parte de la respuesta que no fue impugnada debe declararse consentida, toda vez que, al no haber realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que, en el caso concreto se infiere que la información proporcionada por el **Sujeto Obligado**, satisface la solicitud presentada, respecto de los requerimientos que no fueron combatidos.

Lo anterior es así, debido a que cuando la parte **Recurrente** impugna la respuesta del **Sujeto Obligado**, y este no expresa Razón o Motivo de Inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que la parte Recurrente ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de Apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Consecuentemente, se insiste, ante la falta de impugnación eficaz, la respuesta entregada debe declararse consentida por persona solicitante.

Sirve de sustento lo plasmado en el Criterio de interpretación con clave de control SO/001/2020, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto, lo siguiente:

*“****Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.*** *Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.”*

Asimismo, resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

Asimismo, es oportuno referir que no escapa de la óptica de este Organismo Garante que la persona solicitante, al momento de interponer su recurso de revisión, realizó diversos planteamientos subjetivos, tales como “*ya que oculta los recursos que fueron entregados al servidor público del que se realizó la solicitud. Pareciera que se actúa con dolo para proteger a un deudor alimentario*” (sic), ante lo cual se puntualiza que el Derecho al acceso a la información pública constituye una prerrogativa para acceder a documentos o registros de información pública generada o en posesión de los Sujetos Obligados, motivo por el cual, este Organismo Garante precisa que dichas manifestaciones no son susceptibles de ser tomadas en consideración en la resolución del presente asunto, toda vez que no constituyen el ejercicio de un Derecho de acceso a la información pública, sino más bien el ejercicio de un Derecho de expresión. En este sentido, se trata de manifestaciones sobre las cuales este Instituto no está facultado para pronunciarse.

Durante la etapa de manifestaciones, el **Sujeto Obligado** ratificó la respuesta emitida en primera instancia, mientras que la parte **Recurrente** fue omisa en pronunciarse, por lo tanto, se tiene por prelucido su derecho para tal efecto.

Una vez establecidas las posturas de las partes, es imprescindible mencionar que de la lectura de los motivos de inconformidad alegados por la parte **Recurrente,** se advierte, como se adelantó, que su disentimiento no se refiere a los comprobantes de pago del servidor público referido que fueron entregados por el **Sujeto Obligado**, y la temporalidad de los mismos, los cuales dan cuenta de la totalidad de las percepciones ordinarias y extraordinarias del servidor público, sino que se refiere a la clasificación de información, que a su parecer guarda el carácter de pública, la cual consiste en los recursos que fueron entregados al servidor público de quien se solicitó la información.

Por consiguiente, el presente estudio se enfocará en el análisis de la versión pública de los comprobantes de pago remitidos por el **Sujeto Obligado,** y la procedencia de la clasificación de los datos que fueron testados en la misma, con la finalidad de determinar si satisface el Derecho de acceso de la persona solicitante, o, en su defecto, ordenar el soporte documental correspondiente, en caso de ser procedente.

Para efectos de lo anterior, es preciso referir, en primer lugar, que el **Sujeto Obligado**, al ser al ser un ente que ejerce recursos públicos, tiene la obligación de transparentar sus actuaciones, garantizando el derecho humano de acceso a la información pública, lo cierto es que dicho derecho puede ser restringido de manera excepcional por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley, a través de la clasificación de la información como confidencial o reservada para permitir el acceso, como se desprende del artículo 91 de la Ley de la Materia que es del tenor literal siguiente:

***“Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.”*

Es importante mencionar que la restricción al derecho de acceso a la información implica necesariamente una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con las normas aplicables.

Así, se entiende como información reservada aquella que se clasifica de manera temporal cuya divulgación pueda causar algún daño; y como información confidencial, la relacionada con los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como la información privada contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.

En lo que concierne a la información clasificada como confidencial, para que el acceso a la información pública pueda ser restringido, se deben actualizar los supuestos establecidos en el artículo 116 de la y Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública y el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra señalan lo siguiente:

*“****Artículo 116.*** *Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.*

*Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

*Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.”*

*“****Artículo 143.*** *Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I****. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.”*

De este modo, conforme al artículo 132 de la Ley en la Materia Local, para clasificar la información se debe de atender a lo dispuesto por la normativa y aplicar, de manera estricta, las excepciones del derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, debiendo clasificar la información en el momento en que:

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
2. Se determine mediante resolución de autoridad competente; y/o
3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

En ese sentido, es de precisar que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que es necesario que el **Sujeto Obligado,** cuando clasifique algún documento o información, ya sea todo o en parte, atienda lo dispuesto por la Ley de la materia, siendo que dicha clasificación es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del **Sujeto Obligado**, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego esta se presente ante al Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y que finalmente sea este último quien apruebe, modifique o revoque la misma, como se desprende de los artículos 59 fracción V[[1]](#footnote-1), 53 fracción X[[2]](#footnote-2), y 49 fracciones II y VIII[[3]](#footnote-3) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Respecto a la elaboración de versiones públicas de documentos que contengan datos personales, los Sujetos Obligados deben observar, además, lo dispuesto en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

En este tenor, los Lineamientos Quincuagésimo, Quincuagésimo primero, Quincuagésimo segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación señalan las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado**, siendo estas las siguientes:

***“Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

***I.*** *El número de sesión y fecha;*

***II****. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

***III****. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

***IV****. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

***V****. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:*

***I.*** *Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*

***II****. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial****;***

***III.*** *El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*

***IV.*** *El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

*En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.*

***Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso especifico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I.*** *Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

***II.*** *Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

***III.*** *Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.”*

Asimismo, los Lineamientos Quincuagésimo cuarto, Quincuagésimo quinto, Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.*

***...***

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública **debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia** que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Una vez establecido lo anterior, se procede al análisis de la versión pública de los comprobantes de pago remitidos por el **Sujeto Obligado**, así como del acuerdo mediante el cual el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de los datos que fueron eliminados o testados de los mismos, con la finalidad de determinar si la restricción al Derecho de acceso de la persona solicitante se encuentra justificada.

En tal sentido, se menciona que los datos que fueron testados en los comprobantes de pago del servidor público referido, corresponden con: clave ISSEMyM, Registro Federal de Contribuyentes, RFC; afiliación sindical, número de cuenta, total de percepciones, total de deducciones, total de neto pagado, cuota de sistema de capitalización individualizada, retención prima años de servicio burócrata, prima años de servicio burócrata, prima vacacional base, despensa, seguros de vida, ausentismo, compensación, sanción económica, gratificación por convenio, aguinaldo, retención aguinaldo incidencias, gratificación semestral, fondo de resistencia, cuota Suteym, cuota de mutualidad Suteym, gastos de transporte, retención de estímulo especial, previsión social múltiple, retención de útiles escolares, gratificación por productividad, retención estimulo personal destacado, despensa Suteym fin de año, retención de estímulo de puntualidad y asistencia, apoyo fin de año sindicalizados, compensación por riesgos profesionales y código QR.

Al respecto, es de señalar que se coincide con la protección de los datos relativos a la clave ISSEMyM, el RFC, el número de cuenta del servidor público, así como con el Código QR el cual, en el caso concreto contiene la clave ISSEMyM, por tratarse de datos personales que le conciernen única y exclusivamente a su titular, cuya divulgación no aporta a la transparencia o a la rendición de cuentas por parte del **Sujeto Obligado,** sino por el contrario, con la publicidad de los mismos se provoca una transgresión a la vida privada e intimidad de la persona, vulnerando el Derecho a la protección de sus datos personales, por lo que indiscutiblemente esta información actualiza el supuesto de confidencialidad previsto en los artículos 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, no se coincide con la clasificación de la afiliación sindical, así como con la clave, concepto y monto de las **percepciones** del servidor público, derivadas de la afiliación a la que se hace referencia, así como el total de percepciones, total de deducciones y total neto pagado, por las razones que a continuación se exponen.

En primer lugar, debe partirse de la premisa de que, de conformidad con el artículo 23, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**, los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos** en el ámbito estatal y municipal, **son considerados Sujetos Obligados en materia de transparencia**, por lo que deben permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder.

Lo anterior en el entendido de que aquellos sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos, son objeto de escrutinio público, en otras palabras, el hecho de que los sindicatos reciban recursos públicos genera el derecho de cualquier persona de conocer su origen y destino; por lo que deben rendir cuentas en dos vertientes: por un lado, tienen el deber de rendir cuentas a su agremiados en lo que refiere al ámbito laboral y en relación a las cuotas sindicales que ellos aportan; y, por otro, tienen el deber de rendir cuentas a la sociedad en general respecto a los recursos públicos que reciben.

En este sentido, el derivado de la firma del Convenio de prestaciones, entre el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, SUTEYM, y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISSEMyM, es claro que el sindicato recibe recursos que provienen del erario público, por lo que el Sujeto Obligado debe dar cumplimiento a lo previsto en la fracción XX del artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, referente a los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados al Sindicato y ejerzan como recursos públicos.

Ahora bien, respecto al tema que nos ocupa, el artículo 99, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deben poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, entre otra información la relativa al **padrón de socios, afiliados o análogos de los sindicatos** que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad.

En el mismo sentido, el artículo 102, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, además de la información aplicable de las obligaciones de transparencia a que se refiere el Capítulo II de este Título de la Ley, la señalada en dicho precepto legal entre la que se encuentra **el padrón de socios, afiliados o análogos**.

Cabe señalar que los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, disponen lo siguiente para el cumplimiento a dichas obligaciones:

- Artículo 78, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (análogo al artículo 99, fracción IV de Ley de Transparencia Local):

*“****Artículo 78.*** *Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:*

*...*

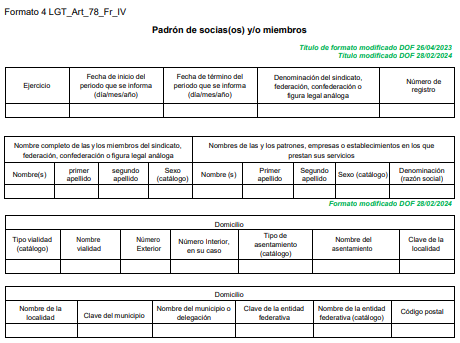
***IV****. El padrón de socios;”*

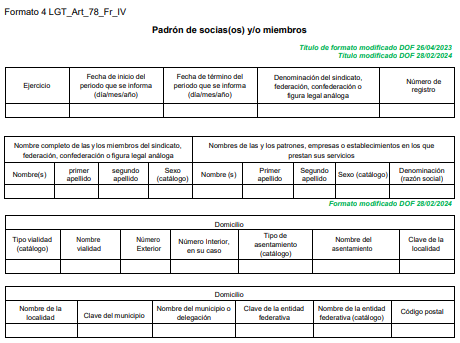
*“El texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto, el padrón de socios las actas de asambleas y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical, deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de los sindicatos y de los Tribunales de conciliación y arbitraje.*

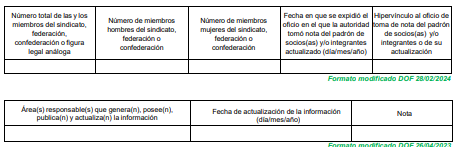
*La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 365 bis establece que, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral* ***hará pública, para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registros de los sindicatos.*** *Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se les soliciten, en términos del artículo 8o. constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

***Entre los datos que deberán contener dichos registros, se encuentra el padrón de socias y socios****, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo, fracción: VIII del citado artículo 365 Bis.*

*La información deberá publicarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el oficio en el que la autoridad tome nota del padrón de socios(as) y/o miembros actualizado.”*







- Artículo 79, fracción III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (análogo al artículo 102, fracción III de Ley de Transparencia Local):

*“****Artículo 79****. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:*

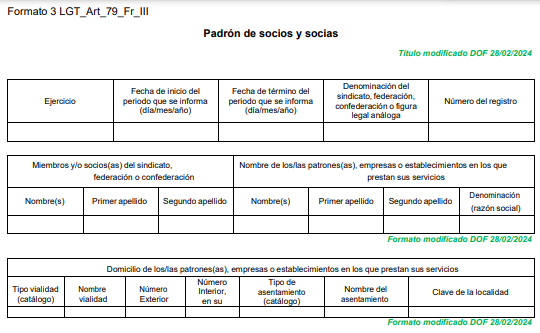
*...*

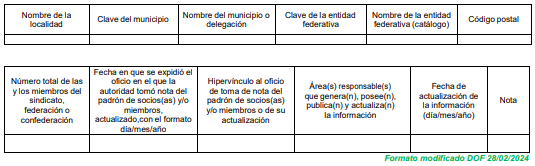
***III.*** *El padrón de socios, y”*

*Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán publicar el número y nombres de sus miembros y/o socios(as) y, en su caso, los nombres y domicilios de los/las patrones(as), empresas o establecimientos en los que aquellos prestan sus servicios.*

*Cabe señalar que únicamente se considerará información confidencial, los domicilios de las trabajadoras y los trabajadores señalados en los padrones de socios(as), de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley General.*

*La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el oficio en el que la autoridad tome nota del padrón de socios(as) actualizado.*





Como se advierte, en ambas obligaciones de trasparencia a cargo de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, así como los sindicatos que reciban recursos y ejerzan recursos públicos, se contempla la publicación, entre otros datos, de la denominación del sindicato y del nombre de los socios o afiliados al sindicato. Siendo imprescindible mencionar que de conformidad con el último párrafo del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, **no puede considerarse como confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública,** por consiguiente, la afiliación sindical del servidor público de quien se requiere información, no puede valorarse como información confidencial.

En el mismo tenor, lo relativo a las percepciones del servidor público, ya que si bien los conceptos a los que hace referencia el **Sujeto Obligado**, tales como retención prima años de servicio burócrata, despensa, gratificación por convenio, aguinaldo, retención aguinaldo incidencias, gratificación semestral, entre otras, se refieren a prestaciones sindicales, no debe perderse de vista que estas se cubren o se solventan a través de la erogación de recursos públicos, por lo tanto, constituyen información de carácter público cuya publicidad abona a la transparencia y a la rendición de cuentas en el actuar del **Sujeto Obligado** por cuanto hace a la administración de los recursos públicos que le son asignados en relación con el Capítulo de gasto 1000 Servicios personales del Presupuesto de egresos, según lo establecido en el artículo 292 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el cual agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborables y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Razón por la cual la información relativa a las remuneraciones de los servidores públicos es considerada una obligación de transparencia a la luz del artículo 92, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*“****Artículo 92****. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

***…***

***VIII****.* ***La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos*** *de base o de confianza, de* ***todas las percepciones****, incluyendo* ***sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación****, señalando la periodicidad de dicha remuneración;”*

En este sentido, es evidente que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios hace referencia de manera específica a que los Sujetos Obligados deben hacer pública la información relativa a la remuneración que perciben todos sus servidores públicos así como de todas las percepciones que integran su sueldo o salario; consecuentemente es necesario que en el caso concreto, el Sujeto Obligado entregue dicha información a la parte recurrente, pues se trata de una obligación determinada por la Ley que rige la materia en la Entidad.

En correlación con lo anterior, la información relativa a las remuneraciones de los servidores públicos, se considera que es de interés general puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el gasto ejercido para el pago de remuneraciones por servicios personales al realizar las funciones públicas; esto es, su acceso permite transparentar la aplicación de los recursos públicos que son otorgados para el cumplimiento de sus funciones, ello conforme a lo dispuesto por los artículos 7 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece como deber de los Sujetos Obligados el hacer pública toda la información respecto a los montos y nombres de las personas a quienes se entreguen recursos públicos y con ello transparentar la forma, términos, causas y finalidad en la disposición de esos recursos; preceptos legales que en su parte conducente señalan lo siguiente:

***“Artículo 7. El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad,*** *autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato* ***que reciba y ejerza recursos públicos*** *o realice actos de autoridad* ***en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios****.*

***…***

***Artículo 23.*** *Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

*(…)*

***IV. Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la administración municipal;***

*(…)*

***Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.***

*Los servidores públicos deberán transparentar sus acciones así como garantizar y respetar el derecho de acceso a la información pública.”*

Sirven de sustento por analogía, para justificar la publicidad sobre los datos relativos a los montos por concepto de pago de las remuneraciones, los criterios **01/2003** y **02/2003** emitidos por el Comité de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se citan:

***“Criterio 01/2003.***

***INGRESOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONSTITUYEN INFORMACIÓN PÚBLICA AÚN Y CUANDO SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA VIDA O LA SEGURIDAD DE AQUELLOS.***

*Si bien el artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental establece que debe clasificarse como información confidencial la que conste en expedientes administrativos cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, debe reconocerse que aun y cuando en ese supuesto podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y extraordinaria de los servidores públicos, ello no obsta para reconocer que el legislador estableció en el artículo 7 de ese mismo ordenamiento que la referida información, como una obligación de trasparencia,* ***deben publicarse en medios remotos o locales de comunicación electrónica, lo que se sustenta en el hecho de que el monto de todos los ingresos que recibe un servidor público por desarrollar las labores que les son encomendadas con motivo del desempeño del cargo respecto. Constituyen información pública, en tanto que se trata de erogaciones que realiza un órgano del Estado en base con los recursos que encuentran su origen en mayor medida en las contribuciones aportados por los gobernados****…”*

***“Criterio 02/2003.***

***INGRESOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SON INFORMACIÓN PÚBLICA AÚN Y CUANDO CONSTITUYEN DATOS PERSONALES QUE SE REFIEREN AL PATRIMONIO DE AQUÉLLOS.***

*De la interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 3º, fracción II; 7º, 9º y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte que no constituye información confidencial la relativa a los ingresos que reciben los servidores públicos, ya que aun y cuando se trata de datos personales relativos a su patrimonio, para su difusión no se requiere consentimiento de aquellos,* ***lo que deriva del hecho de que en términos de los previsto en el citado ordenamiento deben ponerse a disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica, tanto el directorio de servidores públicos como las remuneraciones mensuales por puesto incluso*** *el sistema de compensación…”*

Por consiguiente, dado que las prestaciones sindicales a que tiene derecho el servidor público referido se cubren con recursos públicos provenientes del presupuesto de egresos del **Sujeto Obligado,** derivado de las negociaciones entre este y el Sindicato respectivo, no es procedente su clasificación como información confidencial, y por tanto, se debe hacer público el monto y conceptos de la totalidad de las percepciones del servidor público referido en la solicitud, incluyendo el total de percepciones, el total de deducciones y el total neto pagado, es decir, el monto del sueldo bruto y el sueldo neto.

Finalmente, respecto a las deducciones es oportuno recurrir al artículo 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios:

***“ARTÍCULO 84.*** *Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:*

***I.*** *Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;*

***II.*** *Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;*

***III.******Cuotas sindicales****;*

***IV.*** *Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;*

***V.*** *Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;*

***VI.*** *Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;*

***VII.*** *Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;*

***VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial;*** *o*

***IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público.***

*El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial.”*

Como se puede observar, el precepto citado establece claramente cuáles son esos descuentos o gravámenes que directamente se relacionan con las obligaciones adquiridas como servidores públicos y aquéllos que únicamente inciden en su vida privada.

De este modo, los **descuentos o deducciones por cuotas sindicales**, **pensiones alimenticias**, y, en general, cualquier descuento de carácter personal como **prestamos,** **créditos adquiridos con instituciones privadas, seguros de vida,** entre otros que no se relacionen con el gasto público, al revelar parte de las decisiones que adopta una persona respecto del uso y destino de su remuneración salarial, lo cual incide en la manera en que se integra su patrimonio; **es información que no es de carácter público, sino que constituye información confidencial** en virtud de que corresponde con decisiones personales, y por tanto, se debe clasificar en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Las claves y conceptos de los descuentos personales guardan también la misma naturaleza que los importes, ya que, al hacerse públicas, es posible inferir que cierto servidor público tiene determinada deducción personal, misma que se relaciona con su esfera más íntima de privacidad, asimismo, en aquellos casos en los que sólo se tenga una deducción, inclusive es posible deducir el importe de la misma, derivado de los cálculos que se hagan respecto al sueldo bruto y sueldo neto.

En el caso particular, el **Sujeto Obligado** clasificó debidamente las deducciones relacionadas con seguros de vida, sin embargo, no fundó ni motivó la clasificación de las demás deducciones que fueron testadas en los comprobantes de pago del servidor público referido en la solicitud, por lo que no se tiene certeza de las razones por las que dichos datos fueron eliminados del soporte documental entregado.

Con base en las consideraciones expuestas, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen fundados, toda vez que se clasificó como confidencial información que reviste el carácter de pública conforme al estudio realizado; en consecuencia, es procedente *Modificar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que para tener por colmado del Derecho de acceso, se estima dable ordenar la entrega de los comprobantes de pago del servidor público referido en la solicitud de información entregados en respuesta, en versión pública correcta, misma que deberá acompañarse del acuerdo de clasificación que para tal efecto emita el Comité de Transparencia, en los términos precisados con anterioridad.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **fundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **04479/INFOEM/IP/RR/2024**; por lo que, en términos del **Considerando** **Cuarto** de esta resolución, se **Modifica** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado**, en términos del **Considerando Cuarto** de esta resolución, haga entrega, vía **SAIMEX**, de lo siguiente:

1. Comprobantes de pago del servidor público referido en la solicitud de información entregados en respuesta, en versión pública correcta.

*Para la entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen, que se deberá poner a disposición de la parte* ***Recurrente****.*

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Cuarto. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA; Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Artículo 59. Los servidores públicos habilitados tendrán las funciones siguientes:

   V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta; [↑](#footnote-ref-1)
2. Artículo 53. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones:

   X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información; [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 49. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:

   II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

   VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información; [↑](#footnote-ref-3)